

**LAS MANUFACTURAS Y EL CALZADO EN LA PROVINCIA DE ALICANTE:  
EL FONDO DE GARANTIA SALARIAL. UNA ESTRATEGIA DE  
SUPERVIVENCIA. (1980-1990)**

**Remedios Ramón Dangla  
(Universidad de Castilla-La Mancha)**

1. INTRODUCCIÓN
2. LA CRISIS ECONOMICA INTERNACIONAL Y SUS EFECTOS SOBRE EL SECTOR INDUSTRIAL: LA PERDIDA DE EMPLEO
  - 2.1. El final del periodo de expansión y la llegada de la crisis. Las peculiaridades españolas.
  - 2.2. Crisis económica y mercado laboral
3. LAS SOLUCIONES A LA CRISIS: LA POLÍTICA INDUSTRIAL
  - 3.1. La política industrial en España
  - 3.2. La industria alicantina: el calzado y la reconversión por decreto
4. UNA ESTRATEGIA DE SUPERVIVENCIA EMPRESARIAL: EL RECURSO AL FONDO DE GARANTIA SALARIAL
  - 4.1. Los despidos individuales disciplinarios: El primer paso hacia el Fogasa
  - 4.2. Las prestaciones del Fogasa: una evidencia
5. LOS RESULTADOS SOBRE LA ECONOMIA ALICANTINA DE LA ESTRATEGIA DE REESTRUCTURACIÓN INDUSTRIAL (1980-1990)
  - 5.1. La evolución del mercado laboral
  - 5.2. El estancamiento de las manufacturas
6. CONCLUSIONES

## **1. INTRODUCCION**

La crisis económica de los años setenta provocó en los países industrializados los mismos problemas de inflación, déficit público y exterior y destrucción de empleo.

España no se vio ajena a esta adversidad pero además, partía de una situación de mayor retraso económico y se enfrentaba a una conflictividad social y política, fruto del proceso de transición democrática. Así pues, los años setenta y principalmente la década de los ochenta es, sin duda, una etapa crucial no sólo para la economía sino para determinar el futuro político y social del país. Era necesario, al mismo tiempo, democratizar las instituciones, abrir la economía y tomar medidas para paliar los efectos de la crisis, sin que se suscitasen enfrentamientos sociales que frenaran el proceso democratizador.

Los obsoletos sistemas productivos industriales debían de ser modernizados si se pretendía mantener una competitividad internacional y para ello, se necesitaba determinar una política industrial que ayudara a las empresas a modernizarse y actuara como un colchón amortiguador de los costes sociales de la reconversión industrial.

El objetivo de este trabajo es, a través de una somera exposición ver cómo, las manufacturas en general y, el calzado en particular, tuvieron que reestructurarse y, articularon unas estrategias para ello, al no poder beneficiarse de unas políticas exteriores que lo protegieran de la competencia internacional ni de las ayudas de un plan de reconversión.

Para ello se verá, en un primer apartado, alguno de los efectos de la crisis económica en España: la pérdida de empleo. En un segundo epígrafe se expondrá la política industrial de los gobiernos españoles y sus medidas apoyar la reconversión de los sectores en declive y la reindustrialización de las zonas afectadas. El sector del

calzado y la provincia de Alicante fueron considerados de especial atención por el volumen de empleo que estaba afectado y por su especialización a la venta exterior, sin embargo, no se pudieron beneficiar de un plan de reconversión y las empresas del ramo tuvieron que reestructurarse ante la apertura de los mercados, la inhibición de la política cambiaria y la falta de actuaciones microeconómicas.

En un tercer epígrafe, se verá como la existencia de una institución pública como es el Fondo de Garantía Salarial fue utilizada en el proceso de reestructuración empresarial y evitó que se dieran conflictos sociales. La garantía de cobrar los créditos laborales al margen del patrimonio del empleador fue considerada como una forma artificial de reducir los costes de despido convirtiendo así, al Fondo en una pieza angular en el proceso de reorganización empresarial y vinculándolo a la evolución de los mercados exteriores.

En un último epígrafe, se verán algunos de los efectos sobre la economía alicantina y sobre los sectores que tuvieron que utilizar esta estrategia para sobrevivir y mantener la competitividad sin el apoyo estatal para cambiar las estructuras productivas.

## **2. LA CRISIS ECONOMICA INTERNACIONAL Y SUS EFECTOS**

### **SOBRE EL SECTOR INDUSTRIAL: LA PÉRDIDA DE EMPLEO**

#### **2.1. El final de periodo de expansión y la llegada de la crisis. Las peculiaridades españolas.**

El punto de inflexión en las prósperas economías occidentales fue 1973<sup>1</sup>. El detonante fue el primer incremento de los precios del petróleo que supuso un deterioro de la relación real de intercambio de los países europeos, un desmoronamiento del

---

<sup>1</sup>Las economías occidentales mostraban síntomas de recalentamiento desde finales de los sesenta, el encarecimiento de las materias primas, la creciente demanda y el alza de los salarios iban provocando tasas de inflación. Sin embargo, la subida de precios del petróleo, en diciembre de 1973, provocó un *shock* de oferta que aceleró la crisis. Entre otros, ROJO, L.A. (1981: 124-136). FUENTES QUINTANA, E. (1989: 25). SERVICIO DE ESTUDIOS DEL BANCO URQUIJO (1982). FINA, L. (1991).

sistema monetario internacional vigente hasta el momento (Bretton-Woods)<sup>2</sup>, una pérdida de renta real disponible, unos altos tipos de interés, una creciente inflación y una masiva pérdida de empleo.

La coexistencia de paro e inflación era un fenómeno hasta entonces desconocido que las políticas económicas tradicionales no podían solucionar<sup>3</sup>. Habían sido afectadas las estructuras productivas de los países occidentales y era necesaria la aplicación de políticas que giraran en torno a una reconversión de los sectores industriales modernizando su base tecnológica para mantener el empleo y la competitividad<sup>4</sup>.

España cayó bajo los efectos de la crisis con la problemática añadida de su economía fuertemente intervenida típica de un régimen dictatorial. Nuestro país tenía un tejido empresarial e industrial poco desarrollado<sup>5</sup>. Además, la crisis coincidió con los últimos años del Régimen y con la Transición democrática, lo que relegaba a un segundo plano la adopción de medidas de política económica que, aunque provocaran descontento social, eran necesarias para superar la situación<sup>6</sup>.

La inflación, las subidas salariales y el volumen del paro obligaban a las distintas fuerzas políticas y sociales a llegar a acuerdos que hiciesen posible la adopción de medidas de ajuste económico sin provocar tensiones sociales<sup>7</sup>. Los exponentes básicos

---

<sup>2</sup>A partir de 1970 se da la no conversión del dólar en oro. Pilar básico para la estabilidad del sistema de relaciones económicas internacionales. FUENTES QUINTANA, E. (1989). ROJO, L.A. (1988).

<sup>3</sup>El modelo de crecimiento económico aplicado desde la década de los cuarenta hasta 1973 fue desarrollado y explicado por Keynes (1936), la idea básica era que tirando de la demanda agregada, a través del gasto público en bienes de consumo e inversión, la oferta y la producción responderían sin necesidad de cambios en las tecnologías ni en las técnicas. Así, con una intervención pública selectiva se consiguió, durante treinta años, crecimiento de la producción y del empleo con el mantenimiento de la estabilidad en los precios. KEYNES, J.M. (1997). GAMIR, L. (1985). GALBRAITH, J.K. (1993).

<sup>4</sup>La crisis de los setenta fue una crisis industrial. El encarecimiento de los inputs y la irrupción de nuevos países industrializados, con costes laborales más bajos, pusieron de manifiesto que los sistemas de producción occidentales, basados en el crudo y la mano de obra como factores de producción baratos, tenían que modernizarse para mantener la competitividad internacional. Opinión comúnmente aceptada. CIRCULO DE EMPRESARIOS, (1984). SEGURA, J. (1983).

<sup>5</sup>Sobre la debilidad del sistema productivos español fruto del intervencionismo franquista. BARCIELA, C. y otros (2001). FUENTES QUINTANA, E. (1989). ROJO, L.A. (1988).

<sup>6</sup>Durante la Transición democrática la mayor preocupación de las autoridades públicas era llevarla a cabo de la forma más pacífica para el país. ROJO, L.A. (1988).

<sup>7</sup>Sobre las causas del crecimiento del paro. GAMIR, L (1985). FINA, L. y TOHARIA, L. (1987).

de dichos acuerdos son: los “Pactos de la Moncloa”, de 1977 y el Estatuto de los Trabajadores, de 1980 (ET). La entrada en vigor del Estatuto de los Trabajadores pretendía reducir las rigideces en el mercado laboral y el desempleo, para ello limitó la intervención nominal del Estado en materia de relaciones laborales, amplió la libertad de negociación colectiva entre las partes, flexibilizó la contratación y el despido<sup>8</sup> y determinó los derechos, obligaciones y garantías de los trabajadores. También, se crearon nuevas instituciones laborales adaptadas a un estado democrático como el Instituto Nacional de Empleo, el Instituto de Mediación, Arbitraje y Conciliación y el Fondo de Garantía Salarial.

Sin embargo, hasta 1981, la subvención al consumo de energía, la protección del mercado nacional y la ampliación de las capacidades productivas de los sectores en declive fueron las únicas medidas de política industrial que se aplicaron satisfaciendo, así, las demandas de los grupos de poder instalados desde el Franquismo<sup>9</sup>.

## **2.2. Crisis económica y mercado laboral.**

La tardanza en la adopción de una política industrial<sup>10</sup> que facilitara la reasignación trabajadores hacia actividades con mayor demanda y la debilidad de la economía española fueron las claves de la pérdida de empleo durante los ochenta. La agricultura y, sobre todo, la industria destruían puestos de trabajo que los servicios y la construcción no pudieron compensar, lo que elevaba las tasas de paro.

---

<sup>8</sup>Las leyes laborales del franquismo sólo aceptaban el despido de trabajadores motivado por “fuerza mayor”: Art. 76 de la Ley de Contrato de Trabajo, de 1944, lo que daba una rigidez nominal al sistema de relaciones laborales. Sin embargo, las múltiples situaciones que integraban la fuerza mayor permitían que muchos casos fueran considerados como constitutivos de fuerza mayor, facilitando un despido rápido y barato. DEL PESO Y CALVO, C. (1970).

<sup>9</sup> La política industrial, hasta 1981, se basaba en la subvención de empresas sin atender a su viabilidad futura. Prevalecía la filosofía de actuación “empresa por empresa” para financiar con dinero público las ineficiencias empresariales pero sin desarrollar un programa integral y coordinado de modernización de plantas de producción, lo que hizo dimitir al Vicepresidente económico del gobierno en 1978, Fuentes Quintana. SEGURA, J (1983). NAVARRO, M. (1990). MARTIN ACEÑA, P. y COMIN, F. (1991).

<sup>10</sup> En la mayor parte de los países de europeos las políticas de ajuste positivo se estaban aplicando desde el bienio 1974-1975. MARIN ARCE, J.M. (1996).

Las estructuras productivas tenían que modernizarse si se quería mantener la competitividad en los mercados internacionales, pero un proceso de renovación técnica y ajuste productivo va acompañado, ineludiblemente, de drásticas reducciones en los tamaños de las plantillas empresariales, por tanto, hasta que no se recuperaron las economías internacionales y no se dieron los efectos positivos de la política industrial, el sector perdía empleo.

Cuadro 1: POBLACION OCUPADA POR SECTORES Y SUS VARIACIONES.  
(Miles. España)

	1980	1983	1986	1989	1980/83	1983/86	1986/89
<b>AGRICULTURA</b>	2.122,1	2.040,6	1.757,9	1.598,2	-3,8%	-13,9%	-9,1%
<b>INDUSTRIA</b>	3.069,3	2.743,7	2.640,9	2.900,5	-10,6%	-3,7%	9,8%
<b>CONSTRUCCION</b>	953,9	916,8	833,9	1.134,9	-3,9%	-9,0%	36,1%
<b>SERVICIOS</b>	5.186,6	5.383,4	5.731,7	6.706,6	3,8%	6,5%	17,0%
<b>TOTAL</b>	11.366,4	11.084,4	10.964,4	12.340,2	-2,5%	-1,1%	12,5%

Fuente: EPA. Elaboración propia.

A partir de 1985, la industria empezó a recuperar puestos de trabajo y la construcción y los servicios se convirtieron en el motor económico del país. No obstante, las tasas de paro no mejoraron: las expectativas de encontrar un puesto de trabajo y la incorporación de la mujer al mercado laboral aumentaban la población activa.

### 3. LAS SOLUCIONES A LA CRISIS: LA POLÍTICA INDUSTRIAL

#### 3.1. La política industrial en España

La entrada en vigor de la conocida “Ley Bayón”<sup>11</sup>, de 1981, y, sobre todo, la llegada al gobierno de un nuevo partido político en 1982, permitió que se desarrollara, en nuestro país, una autentica política industrial que correspondiera a una estrategia global y coherente de intervención estatal<sup>12</sup>. La política de ajuste positivo tenía dos pilares básicos. Por una parte, la dotación de ayudas estatales financieras para la transformación sectorial manteniendo una amplia cobertura de aspectos laborales, de Seguridad Social y asistenciales que amortiguara los costes sociales de la reconversión.

<sup>11</sup>Real Decreto Ley 9/1981, de 5 de junio, sobre reconversiones industriales.

<sup>12</sup> Sobre la política de reconversión industrial en España, sus medidas, ayudas públicas, subvenciones, sobreprotección del empleo, etc. NAVARRO, M. (1999). SARGANDOY BENGOCHEA, J.A. (1984).

Por otra, la promoción de sectores de futuro para reemplazar los recursos laborales excedentarios de la reconversión y potenciar el desarrollo económico de las zonas afectadas.

El objetivo fundamental de la Ley Bayón, era apoyar a sectores básicos para la economía nacional, los cuales tendrían acceso a ayudas públicas financieras y relajación de las normas que protegen el empleo, costeadas por el Estado, para facilitar la modernización sin conflictos sociales. Se determinaron once<sup>13</sup> sectores básicos y, por tanto en reconversión, atendiendo a tres criterios<sup>14</sup>: la tradición exportadora, la capacidad de generar empleo, la producción estratégica para el país.

Los sectores declarados en reconversión debían elaborar un Plan negociado entre las Asociaciones Empresariales, las Centrales Sindicales y los órganos competentes de la Administración<sup>15</sup>, en el que se abordaran los problemas de fondo de cada sector, se determinaran las medidas a adoptar, los plazos y las cantidades necesarias.

El disfrutar de un Plan de Reconversión beneficiaba a las empresas del sector, a los trabajadores y a las áreas geográficas afectadas. En primer lugar, a las empresas porque accedieron a subvenciones y créditos para ejecutar la modernización técnica<sup>16</sup>. Además, obtuvieron una flexibilización de la disciplina del despido, al poder redimensionar sus plantillas sin tener que tramitar un Expediente de Regulación de

---

<sup>13</sup>Siderurgia integral, Construcción naval, Aceros especiales, Aceros comunes, Electrodomésticos de línea blanca, Equipo electrónico para la automoción, Componentes electrónico, Forja pesada, Semitransformados del cobre, Textil y calzado. FERNANDEZ CASTRO, J. (1985).

<sup>14</sup>Declaraciones del Ministro. Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados, núm. 117, de 17 de junio, de 1981. Estos criterios se mantuvieron con la llegada al ejecutivo de un nuevo partido político, en 1982, y con la redacción definitiva de la ley de reconversión industrial. Ley 21/1982, de 9 de junio.

<sup>15</sup>Artículo 1.1 de la Ley sobre reconversión industrial. Ley 21/1982, de 9 de junio.

<sup>16</sup>Entre 1982 y 1986 se dieron entre créditos y subvenciones a empresas de sectores con un plan 1.200.000 millones de pesetas. FERNANDEZ CASTRO, J. (1985).

Empleo<sup>17</sup> (ERE) y al disfrutar de un fraccionamiento y reducción de las indemnizaciones por despido.

En segundo lugar, a los trabajadores afectados porque consiguieron una superprotección privilegiada al poder acceder a la jubilación anticipada en condiciones excepcionales, al ver ampliadas las cuantías y el tiempo de las prestaciones por desempleo con respecto a los desempleados que procedían del régimen ordinario y al disfrutar de suspensiones de contrato en vez de despidos. Además, con la creación de los Fondos de Promoción de Empleo (FPE) y las Zonas de Urgente Reindustrialización (ZUR) se primaba, con subvenciones y bonificaciones en las cuotas a la Seguridad Social, su recolocación.

En tercer lugar, a las áreas afectadas porque con las ZUR<sup>18</sup> se atraía inversión al conceder subvenciones y beneficios fiscales a las empresas que allí se instalasen.

No obstante, tanto los FPE como las ZUR fueron instrumentos que, con su compra del trabajo y la subvención a la creación de empresas, elevaron el grado de discriminación entre los trabajadores y las regiones que tenían un Plan y las que no<sup>19</sup>.

### **3.2. La industria alicantina: El calzado y la reconversión por decreto.**

La estructura económica alicantina se caracteriza por la importancia del sector manufacturero<sup>20</sup>. Subsectores como el calzado, textil, juguete y turrón tienen tradición en la provincia desde el siglo XIX<sup>21</sup>. La especialización en procesos productivos

---

<sup>17</sup>El Art. 51 del Estatuto de los Trabajadores, de 1980, establecía los procedimientos para realizar despidos colectivos motivados en causas económicas o tecnológicas, entre los que se encuentran la consulta con los representantes legales y la autorización administrativa. El hecho de pertenecer a un sector en reconversión y tener un plan era causa suficiente para la regulación de empleo. SARGANDOY BENGOCHEA, J.A. (1984).

<sup>18</sup> Sólo se podía crear ZUR si en esa área existía un FPE. Se declararon 6 ZUR: Asturias, Barcelona, Cádiz, Galicia (Ferrol-Vigo), Madrid y Nervión.

<sup>19</sup> Sobre la discriminación entre regiones y trabajadores por la aplicación de la política industrial. NAVARRO, M. (1989). SARGANDOY BENGOCHEA, J.A. (1984). MONEREO PEREZ, J.L. (1988).

<sup>20</sup>Las manufacturas alicantinas empleaban, a principios de los ochenta, al cuarenta por cien de la población activa, generan, en la actualidad, un tercio del producto interior bruto provincial y suponen más del ochenta por ciento de las exportaciones.

<sup>21</sup>Sobre las características y tradición de las manufacturas alicantinas. SEBASTIA ALCARAZ, R. (1999). RAMOS HIDALGO, A. (Dir). (1996). MIRANDA ENCARNACION, J.A. (1998).

intensivos en mano de obra barata y escaso nivel tecnológico permitieron su expansión durante los años del desarrollismo español. Sin embargo, los factores que permitieron su crecimiento en una época se convirtieron en los obstáculos que dificultaban su recuperación en otra.

Cuadro 2: EXPORTACIÓN DE CALZADO SOBRE EL TOTAL DE EXPORTACIONES INDUSTRIALES ALICANTINAS. (Mill. de pesetas corrientes)

	<i>Exportación industrial</i>	<i>Exportación calzado</i>	<i>% Exportación calzado sobre total industrial</i>
<b>1983</b>	98.960	75.704	76,5
<b>1984</b>	144.698	107.624	74,3
<b>1985</b>	157.114	123.584	78,6
<b>1986</b>	143.599	116.029	80,8
<b>1987</b>	150.630	103.799	68,9
<b>1988</b>	150.865	101.707	67,4
<b>1989</b>	154.540	102.739	66,4
<b>1990</b>	170.590	116.489	68,2

Fuente: IVEX. Consejo de Cámaras de Comercio de la Comunidad Valenciana. Elaboración propia

De entre las manufacturas alicantinas, la industria del calzado y auxiliares tiene especial importancia por el número de trabajadores que emplea, por su participación en la producción y por su especialización en la venta exterior (Cuadros 2 y 3). Por ello, fue considerado como un sector básico nacional que precisaba de una reconversión y que tendría acceso a las ayudas públicas estatales para afrontarla.

Cuadro 3: PERSONAS OCUPADAS EN EL CALZADO ALICANTE Y TOTAL INDUSTRIA. COMUNIDAD VALENCIANA\*

	<i>Número de trabajadores</i>		<i>% calzado sobre el total</i>	<i>Tasas de variación anual</i>	
	<b>Calzado</b>	<b>Total industria</b>		<b>Calzado</b>	<b>Total industria</b>
<b>1981</b>	35.837	296.017	12,1%		
<b>1982</b>	28.661	253.093	11,3%	-20,0%	-14,5%
<b>1983</b>	25.352	251.709	10,1%	-11,5%	-0,5%
<b>1984</b>	26.256	245.003	10,7%	3,6%	-2,7%
<b>1985</b>	23.809	231.932	10,3%	-9,3%	-5,3%
<b>1986</b>	22.399	232.845	9,6%	-5,9%	0,4%
<b>1987</b>	21.123	239.072	8,8%	-5,7%	2,7%
<b>1988</b>	21.631	247.717	8,7%	2,4%	3,6%
<b>1989</b>	23.599	260.462	9,1%	9,1%	5,1%
<b>1990</b>	21.904	265.950	8,2%	-7,2%	2,1%

Fuente: INE. Encuesta Industrial. Elaboración propia

\*La producción zapatera de la Comunidad Valenciana está concentrada en la provincia de Alicante.

La mayor parte de la producción nacional de zapatos está concentrada en las comarcas alicantinas del Valle del Vinalopó<sup>22</sup>, por tanto, el desarrollo económico provincial depende mucho de esta industria<sup>23</sup>.

Paradójicamente la industria del calzado no pudo beneficiarse de las ayudas estatales de la política industrial y, aunque la provincia de Alicante estaba en el grupo de las más afectadas por su posible pérdida de empleo, no estuvo en promoción. Ello no quiere decir que el sector no tuviera un Plan de Reconversión, sino que el gobierno omitió las propuestas consensuadas por la Comisión Tripartita<sup>24</sup> y elaboró un plan por decreto (Real Decreto Ley 1002/1982, de 14 de mayo)<sup>25</sup>.

Las propuestas de la Comisión giraban en torno a los distintos problemas del sector y pretendían, en definitiva, la aplicación de una política global que incentivara la reasignación de recursos y permitiera la mejora de la competitividad en un sector especializado en la exportación. En primer lugar, instaba al gobierno a adoptar medidas que redujeran la economía sumergida en aras de una competencia más leal y de evitar la degradación de las condiciones laborales y empresariales de la provincia. En segundo lugar, se solicitaba apoyo económico para afrontar la modernización técnica, sobre todo, para desarrollar otras actividades relacionadas con el sector pero con un mayor contenido tecnológico y para mejorar los procesos de distribución y exportación. En tercer lugar, se pretendía que se redujeran las cuotas a la Seguridad Social de la parte empresarial. En cuarto lugar, y para facilitar el redimensionamiento de las plantillas sin que sufrieran los costes los trabajadores, se solicitaba la reducción de la jornada laboral

---

<sup>22</sup>A 31 de diciembre, de 1981, los empleados en el subsector del calzado en España eran 55.000. En la provincia de Alicante se concentra el 56% de las empresas y el 53% del empleo en el sector. Ministerio de Industria y Energía. (1983)

<sup>23</sup>La primera provincia productora de calzado es Alicante seguida de la Comunidad Autónoma Balear que concentra el 12% de las empresas y del empleo. Ministerio de Industria y Energía (1983)

<sup>24</sup>La Comisión Tripartita estaba compuesta por representantes de la patronal, de los sindicatos y de la Administración. En 1980, se creó y consensuaron las medidas a adoptar para abordar la problemática específica del sector.

<sup>25</sup>El textil también tuvo un Plan de Reconversión por Decreto. (Real Decreto 2010/1981, de 6 de mayo)

a cuarenta horas, la jubilación anticipada y obligatoria a los sesenta años, la legalización del trabajo a domicilio y el temporal.

Sin embargo, el Real Decreto de reconversión no consideró ninguna de las propuestas, fue una mera declaración de voluntades, alejado de la realidad del sector, sin contrapartidas públicas específicas, sin concreción en cifras y anualidades, ni organismos gestores, en cambio, con exigentes restricciones económicas para las empresas, y los trabajadores afectados, que quisieran acceder al Plan<sup>26</sup>. Por lo tanto, sólo algunas empresas, que fabricaban largas series y no tenían problemas de solvencia, pudieron acceder a los beneficios del plan (Ybarra, J.A. 1982).

La protección exterior y, sobre todo, el uso del tipo de cambio quedaban como los únicos instrumentos que permitieran fortalecer el aparato productivo y la competitividad del sector. Sin embargo, la política económica optó por una estrategia de actuación donde la liberalización comercial y el tipo de cambio se usaron como instrumentos de estabilización y no como medidas que mejoraran la competitividad de nuestros exportadores (Costas, A. y Serrano, J.M. 1995). La obligada liberalización de los mercados para alcanzar la integración en la Comunidad Europea y el escaso uso del tipo de cambio como instrumento de promoción de las exportaciones, aunque sólo fuera de forma puntual, limitaban, aún más, el apoyo estatal al sector zapatero<sup>27</sup>.

La elevada dependencia de la industria del calzado del mercado exterior provocó que las fluctuaciones en los tipos de cambio se tradujeran en variaciones en la producción. Así, La fuerte apreciación del dólar, en 1984 y 1985, permitió que el sector

---

<sup>26</sup> Las medidas del Decreto de reconversión del calzado exigían a las empresas que solicitasen ayuda económicas que estuvieran al corriente de las pagos tributarios, fiscales y con la Seguridad Social, sin posibilidad de moratoria o aplazamiento como en otros sectores, lo que era inconsistente con una situación de crisis. También exigía la reducción de los salarios de los trabajadores a los requerimientos del mercado para el producto, mientras que en otros sectores en reconversión se mantenían los niveles retributivos aun estando en suspensión los contratos

<sup>27</sup> Durante la década de los ochenta sólo se practicó una devaluación competitiva, en diciembre de 1982. En general, el resto de los años, la peseta mantuvo un tipo de cambio apreciado para cortar las expectativas inflacionistas y como consecuencia de la financiación extranjera del déficit público. Entre otros, COSTAS, A. y SERRANO, J.M. (1995). ALONSO, J.A. (1988).

incrementara sus ventas a Estados Unidos pero, a partir de 1986, las medidas proteccionistas impuestas por dicho mercado<sup>28</sup>, la entrada en la Comunidad Europea y la dificultad para hacer devaluaciones competitivas ante el deseo de la integración de la peseta en el Sistema Monetario Europeo, mantuvieron una apreciación efectiva de nuestra moneda que, junto con el mayor diferencial inflacionario de la economía española, mermaban la competitividad exterior del sector, lo que se traducía en menores exportaciones (Cuadro 2).

Las escasas actuaciones microeconómicas y el mantenimiento de un tipo de cambio real apreciado fue consolidando una estructura productiva cuya ventaja relativa se encontraba en los costes laborales (Segura, J. 1995:171). Sin una actuación pública que permitiera una readaptación de forma suave, ordenada y sostenible y con una mayor competencia internacional, la iniciativa privada se vio abocada a desarrollar unas estrategias poco ortodoxas para la subsistencia del sector.

El modelo básico de supervivencia giraba en torno a la reducción del tamaño de las plantillas que se conseguía con el cierre de la empresa y el consecuente despido de trabajadores que, a su vez, iba acompañado de impago de las deudas, tanto a los trabajadores como al fisco y la Seguridad Social. Los créditos de los trabajadores eran abonados por el Fogasa y las deudas con la Administración quedaban sin pagar. Posteriormente se abría otra empresa más pequeña, que sólo producía aquella parte del proceso de producción que no se podía ocultar y el resto había sido fraccionado y ocultado, con lo que se reducían los costes y por tanto, se podía seguir compitiendo en los mercados internacionales, pero se entraba en una dinámica que limitaría la renovación del utillaje, el desarrollo de otras actividades generadoras de mayor valor añadido y el reciclaje de la mano de obra.

---

<sup>28</sup>La protección del mercado estadounidense a los zapatos españoles hizo reducir las ventas a ese país, en 1986, en un 17%. CONSEJO DE CAMARAS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA, (1986).

#### **4. UNA ESTRATEGIA DE SUPERVIVENCIA EMPRESARIAL: EL RECURSO AL FONDO DE GARANTIA SALARIAL.**

Entre 1981 y 1990 se perdieron en el la industria del calzado alicantina más de 13.000 empleos (cuadro 3). Los excedentes laborales solían ser despedidos de forma individual. Posteriormente, la Autoridad Judicial los declaraba improcedentes por haber desaparecido el empresario y obligaba al Fondo de Garantía Salarial a abonar los salarios pendientes de pago y las indemnizaciones por despido. Estos trabajadores quedaban en desempleo con las prestaciones establecidas por el régimen ordinario, sin ayudas para su recolocación y sin posibilidad de acceder a la jubilación anticipada. Sin embargo, la posibilidad de cobrar parte de sus créditos laborales del Fogasa y de tener un empleo en la economía oculta les convertía en afectados sumisos.

El Fondo de Garantía Salarial se creó en 1976, es un Organismo Autónomo dependiente del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, con personalidad jurídica y capacidad de obrar para el cumplimiento de sus fines<sup>29</sup>.

La función principal del Organismo es abonar los salarios pendientes de pago y las posibles indemnizaciones, a causa de insolvencia, quiebra, suspensión de pagos o concurso de acreedores<sup>30</sup> y la financiación la obtiene de las cotizaciones obligatorias de todos aquellas empresas que tengan personal empleado. Aunque también puede obtener ingresos al ejercer la obligación de subrogarse en los derechos y acciones de los

---

<sup>29</sup>La regulación básica del Fogasa se encuentra en el Artículo 33 del Estatuto de los Trabajadores.

<sup>30</sup>Por salarios pendientes de pago, incluidos los de tramitación en caso de existir, el Fondo no podrá abonar un importe superior a la cantidad que resulte de multiplicar el duplo del salario mínimo interprofesional diario por el número de días de salario pendiente de pago, con un máximo de ciento veinte días. Las indemnizaciones por despido están garantizadas con el límite máximo de una anualidad de salarios, sin que el salario diario, base de cálculo pueda exceder del duplo del salario mínimo interprofesional. Art. 33 del ET.

trabajadores frente al empresario y al recuperar cantidades mediante la firma de acuerdos o convenios de devolución<sup>31</sup>.

La garantía de cobrar los créditos laborales independientemente del patrimonio del empleador ha dado estabilidad al sistema de relaciones sociolaborales y por ello, se dice que el Fogasa se ha convertido en un eficaz “instrumento de pacificación social”<sup>32</sup>. Sin embargo, en Alicante el Fondo también ha facilitado la reestructuración de los sectores, fundamentalmente calzado, al considerar la garantía de los créditos laborales como una reducción los costes de despido y por tanto, una subvención a fondo perdido que flexibiliza el mercado de trabajo.

#### **4.1. Los despidos individuales disciplinarios: El primer paso hacia el Fogasa**

El elevado número de despidos individuales provinciales (Cuadro 4) se debe, por un lado, al predominio de pequeñas empresas que evita la necesidad de tramitar un ERE: la extinción de un solo contrato de trabajo es suficiente para redimensionarla. Sin embargo, la resistencia a disminuir anacrónicamente y en contra de lo que ocurrió con los despidos españoles indica que las empresas alicantinas seguían reestructurándose en un periodo de expansión económica.

La reducción de las ventas exteriores como consecuencia de la sobrevaloración de nuestra moneda, desde 1985, se traducía, de forma inmediata, en más despidos y cierres empresariales. Ni tan siquiera, la fuerte apreciación del dólar en los años 1984 y 1985 que tiró de las exportaciones pudo compensar, satisfactoriamente, la disminución de ventas (cuadro 2) y por lo tanto, frenar la estrategia empresarial para sobrevivir.

---

<sup>31</sup>Las necesidades financieras del Fogasa llevaron a una reforma legal del Organismo (RD. 505/1985, de 6 de marzo) por la que se determinó la posibilidad de firmar acuerdos o convenios de devolución con las empresas que necesitaran despedir a trabajadores pero no pudieran abonar las indemnizaciones, lo que conjugaría la acción recuperatoria con el mantenimiento empresarial y la salvaguarda del empleo.

<sup>32</sup>Las instituciones de garantía salarial nacen en los años setenta. Las numerosas insolvencias empresariales y la dificultad para cobrar los créditos laborales de los trabajadores por los métodos tradicionales: privilegio salarial, llevó a los Estados a crear seguros de salarios para evitar conflictos sociales y políticos. GARCIA MURCIA, J (1983). PEREZ PEREZ, M. (1980)

Cuadro 4: EXTINCIONES DE CONTRATOS POR DESPIDOS

	ESPAÑA		C. VALENCIANA		ALICANTE		Representación de despidos individuales sobre el total*		
	Individl	ERES	Individl	ERES	Individl	ERES	España	C. Val	Alicant
1980	317.252	60.213	46.350	7.797	16.195	3.575	84,0	85,6	81,9
1981	333.024	57.351	51.511	4.703	17.758	2.139	85,3	91,6	89,2
1982	294.030	61.787	46.396	7.026	17.154	1.307	82,6	86,8	92,9
1983	283.543	59.890	44.711	5.702	18.128	907	82,6	88,7	95,2
1984	278.135	68.934	44.006	4.781	17.151	1.179	80,1	90,2	93,6
1985	239.674	74.737	38.888	6.896	15.889	1.318	76,2	84,9	92,3
1986	221.597°	56.853	35.260	4.713	15.295	1.059	79,6	88,2	93,5
1987	218.369°	64.651	33.422	4.102	14.687	1.714	77,2	89,1	89,5
1988	229.030°	56.634	35.457	4.566	16.038	1.741	80,2	88,6	90,2
1989	230.759	46.301	31.046	3.899	12.082	1.095	83,3	88,8	91,7
1990	245.335	48.582	32.019	4.378	12.415	1.331	83,5	88,0	90,3

Fuente: Boletín de Estadísticas Laborales, varios años. Elaboración propia.

° No incluye datos del País Vasco

\* El total de despidos se ha considerado mediante la suma de los individuales y los colectivos

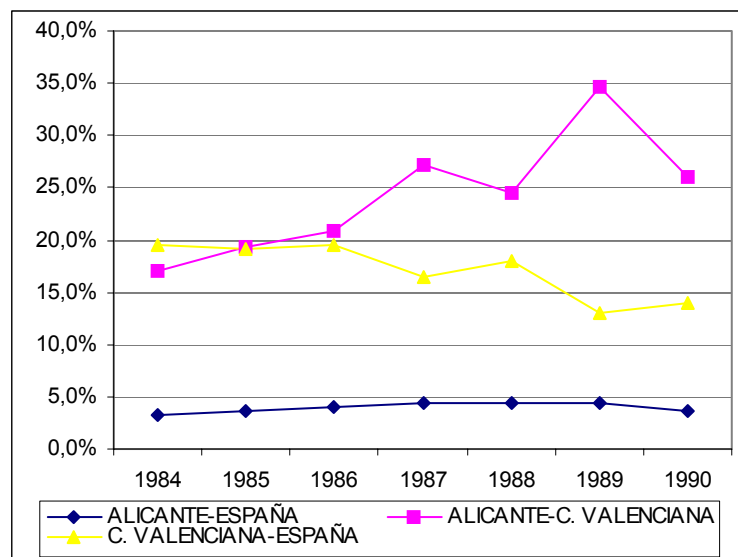
1 Los despidos individuales se han aproximado con el número de casos en el IMAC, ya que la mayor parte de extinciones de contrato pasarán por este servicio para obtener una conciliación.

En términos generales, la falta de acuerdo en el Instituto de Mediación Arbitraje y Conciliación (IMAC) suele estar condicionada a dos intereses independientes entre sí y que proceden tanto de la parte contratada como del empleador. Por el lado del trabajador, la expectativa de que el Juez considere un despido como improcedente y percibir una mayor indemnización<sup>33</sup> lo motiva a no conciliarse en el IMAC. Por el lado del empleador, la falta de liquidez le impide alcanzar acuerdos con los trabajadores despedidos en materia de indemnización, la dilación en el tiempo para abonar las indemnizaciones por despidos, si se llega a juicio, encubre momentáneamente la precaria situación económica de la empresa, lo que eleva el grado de judicialización de los despidos durante las crisis económicas y lo reduce en las fases expansivas del ciclo. Paradójicamente, los despidos resueltos en los tribunales provinciales no tiene una evolución anticíclica (Gráfico 1). La resistencia a la baja de forma anacrónica indica la existencia de un alto grado de conflictividad que nos pone sobre la pista de la estrategia empresarial para subsistir: las empresas se declaraban insolventes y cerraban sus

<sup>33</sup> El despido es considerado como una negociación que gira, básicamente, en torno a las cantidades indemnizatorias y las probabilidades de que el despido individual sea considerado como improcedente, en cuyo caso, se obtiene una mayor indemnización. MALO OCAÑA, M.A. (1998).

instalaciones dejando de pagar salarios, indemnizaciones, cuotas a la Seguridad Social, e incluso, deudas con acreedores, por tanto, tenía que ser un juez quien dictaminara la improcedencia de los despidos.

Gráfico 1: DESPIDOS INDIVIDUALES RESUELTOS EN TRIBUNALES.  
Pesos relativos en porcentajes.



Fuente: Boletín de Estadísticas Laborales. Elaboración propia.

La imposibilidad de llegar a un acuerdo en el (IMAC)<sup>34</sup> era debido, en la mayor parte de ocasiones, a que el empleador no se personaba en los actos de conciliación, por lo que el juez determinaba la improcedencia del despido y ponía en funcionamiento el mecanismo de garantía salarial (Cuadro 6).

La estabilidad económica y, sobre todo, social hubiera estado en peligro ante un elevado número de trabajadores sin empleo y sin percibir sus créditos laborales consolidados por su antigüedad en el puesto de trabajo. No obstante, la existencia de un seguro de salarios que hacía frente al riesgo de la insolvencia empresarial redujo los efectos adversos, sobre la economía y la sociedad, de las prácticas generalizadas de cierre e impago de créditos. La garantía de cobrar las deudas laborales de una institución pública domesticó la voluntad de los trabajadores que, en otro caso, se hubieran

<sup>34</sup>El IMAC (Actual Servicio MAC) fue creado en 1979 para intentar que las partes llegaran a un acuerdo en materia indemnizatoria antes de interponer una demanda en judicial.

mostrado más contestatarios. La posibilidad de cobrar parte de sus créditos y las expectativas de obtener un trabajo clandestino doblegó sus intereses finales derivando en la insolidaridad negociada<sup>35</sup>.

#### 4.2. Las prestaciones del Fogasa. Una evidencia

El Fogasa abona los créditos laborales de las figuras del Sistema Concursal: quiebra, suspensión de pagos, concurso de acreedores<sup>36</sup>, pero también, interviene cuando la Magistratura de Trabajo lo ordena por no encontrar al obligado a realizar el pago. Este tipo de prestaciones se conocen como prestaciones por insolvencia, son de carácter subsidiario y el Fondo intentará recuperarlas al subrogarse en los derechos y acciones de los trabajadores frente al empresario.

Cuadro 5: PRESTACIONES POR INSOLVENCIA EN EL FOGASA.  
España-Comunidad Valenciana-Alicante (Millones de pesetas corrientes)

	<i>España</i>	<i>C. Valenciana</i>	<i>Alicante</i>	<i>% Alicante-España</i>	<i>% Alicante-C. Valenciana</i>
<b>1980</b>	9.110,6	1.171,9	525,5	5,8%	44,8%
<b>1981</b>	24.084,4	4.411,5	2.126,9	8,8%	48,2%
<b>1982</b>	36.186,6	6.367,3	2.982,8	8,2%	46,8%
<b>1983</b>	46.322,8	8.750,2	3.616,7	7,8%	41,3%
<b>1984</b>	59.204,0	10.165,6	4.716,2	8,0%	46,4%
<b>1985</b>	43.936,3	7.667,9	3.388,2	7,7%	44,2%
<b>1986</b>	48.386,8	9.189,6	4.090,0	8,5%	44,5%
<b>1987</b>	68.218,1	16.297,5	7.328,9	10,7%	45,0%
<b>1988</b>	50.044,2	9.700,1	4.171,5	8,3%	43,0%
<b>1989</b>	41.008,7	9.049,3	5.104,1	12,4%	56,4%
<b>1990</b>	36.796,8	8.210,3	4.998,6	13,6%	60,9%

Fuente: Memorias del Fogasa. Elaboración Propia.

El Fogasa también está obligado a realizar prestaciones por regulación<sup>37</sup>. Con ellas se pretende facilitar el redimensionamiento de las pequeñas empresas al

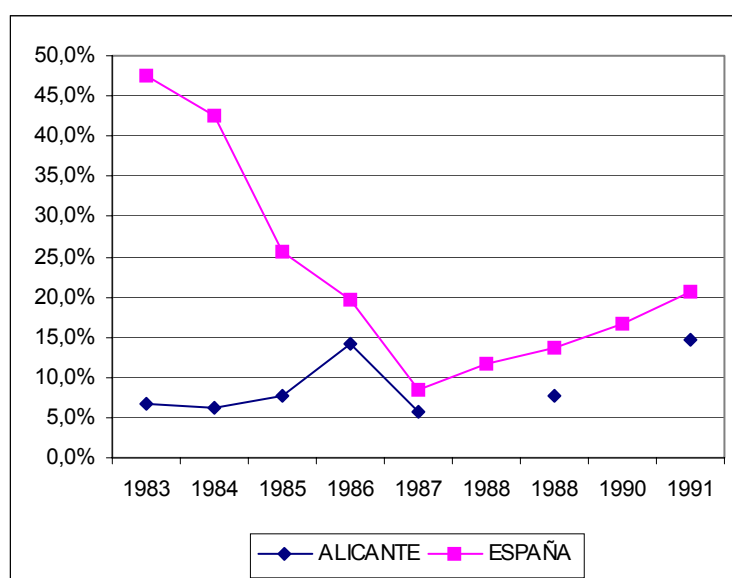
<sup>35</sup>Declaraciones en prensa de Brotons, J.D., dirigente sindical, en las que habla de la “corrupción” de los trabajadores que negocian con el empresario el cierre empresarial y el cobro de los créditos laborales a través del Fogasa. Siendo la culpa, por consentimiento, de la propia Administración Pública. Diario INFORMACION DE ALICANTE, 19-03-88

<sup>36</sup> El Sistema Concursal debería ser un mecanismo de reorganización de los recursos económicos de las empresas en crisis o bien, la liquidación definitiva si la insolvencia es irreversible. Pero su laxitud, flexibilidad y obsolescencia: en nuestro país data del siglo XIX, ha provocado el desprestigio del mismo, su inutilización por parte del empresariado y su reciente reforma. ESPINA MONTERO, A. (1999). CERDA ALBERO, F. y SANCHO GALLARDO, I. (2001).

<sup>37</sup> El Fogasa está obligado a abonar el cuarenta por ciento de las indemnizaciones por despido en caso de empresas de menos de 25 trabajadores, (Actual Artículo 33.8 del ET y derogado Artículo 56.4 del ET), lo que se conoce como prestaciones por regulación.

subvencionarles los despidos. El acceso a este tipo de prestaciones implica la continuidad de la empresa e incluso, con la entrada en vigor del Art. 33.8 del ET , en 1984, la necesidad de justificar el despido, por lo que las empresas alicantinas no utilizan este supuesto de intervención del Fondo. El recurso a la Institución se hace, básicamente, a través de la insolvencia, incluso, entre 1980 y 1984, periodo en el que era financiado el despido improcedente en las pequeñas empresas (Derogado Art. 56.4 del ET) en la provincia no se utilizó la regulación. Por el contrario, en el conjunto español, el Fondo tenía, por este precepto, más del cincuenta por ciento de sus actuaciones (Gráfico 2)<sup>38</sup>.

Gráfico 2: PROPORCION DE EMPRESAS AFECTADAS POR REGULACION.  
ESPAÑA Y ALICANTE



Fuente: Memorias Fondo de Garantía Salarial. Elaboración propia

El fuerte recurso en la provincia de Alicante al Fondo<sup>39</sup> (cuadro 5) pero sobre todo, la importancia de las prestaciones por insolvencia motivando el pago en la decisión judicial que obliga a intervenir a la Institución por la “desaparición de la

<sup>38</sup> Mientras estuvo vigente el Artículo 56.4 del ET el Fondo financió el despido improcedente de pequeñas empresas, lo que provocó una fuerte utilización de Organismos por este supuesto en España pero fue inutilizado en la provincia de Alicante. RAMON DANGLA, R. (2001).

<sup>39</sup> La provincia de Alicante ha estado siempre entre las cuatro primeras que obtienen prestaciones del Fondo. Memorias del Fogasa.

persona jurídica” obligada a realizarlo indica que las prestaciones de la Institución, en nuestra provincia, son destinadas a cubrir los créditos laborales de trabajadores víctimas de cierres súbitos de sus centros de trabajo, al margen del Sistema Concursal y de las leyes laborales para el redimensionamiento de las plantas (Cuadro 6). La necesidad de mantener la competitividad en los mercados internacionales sin el apoyo de una política cambiaria ni la existencia de una políticas microeconómicas, que facilitaran la modernización del sector, hizo que éste se reestructurase utilizando al Fogasa como instrumento que reducía los costes de redimensionamiento empresarial y facilitaba su supervivencia, de ahí, que los últimos años de la década, cuando estábamos sometidos a las rigideces cambiarias que imponía la incorporación al Sistema Monetario Europeo y el dólar se mantenía depreciado, nuestras ventas exteriores se contrajeron (Cuadro 2), lo que se tradujo en un mayor recurso al Organismo por insolvencia en Magistratura. La evolución de los tipos de cambio y el sector exterior estaba íntimamente relacionado con el recurso al Fondo de Garantía Salarial en Alicante.

Cuadro 6: EVOLUCION DE LAS PRESTACIONES POR INSOLVENCIA DEL FOGASA SEGÚN MOTIVO DE PAGO. España- Alicante.  
(Millones de pesetas corrientes.)

	<i><b>INSOLVENC MAGRISTRAT</b></i>		<i><b>SUSPENSION PAGOS</b></i>		<i><b>QUIEBRA</b></i>		<i><b>TOTAL INSOLV</b></i>		<i><b>INSOLV MAGRISTRAT SOBRE TOTAL (%)</b></i>	
	ESP	ALIC	ESP	ALIC	ESP	ALIC	ESP	ALIC	ESP	ALIC
<b>1984</b>	12.727	1.394	2.131	358	188,6	0,6	21.133	2.024,6	60,2	68,9
<b>1985</b>	36.838	2.850,1	5.601,4	512,3	804,4	7,2	43.936	3.388,2	83,8	84,1
<b>1986</b>	41.586	3.752,5	4.856,3	315,9	1.226,4	2,2	48.386	4.090,0	85,9	91,7
<b>1987</b>	60.964	6.342,3	5.834,5	992,6	1.302,7	4,3	68.218	7.328,9	89,4	86,5
<b>1988</b>										
<b>1989</b>	36.683	4.690,4	2.885,5	402,2	1.216,3	6,0	41.008	5.104,1	89,5	91,9
<b>1990</b>	33.188	4.710,4	2.721,9	278,4	758,0	8,4	36.796	4.998,6	90,2	94,2

Fuente: Memorias del Fogasa. Elaboración propia  
1984 comprende sólo de agosto a diciembre

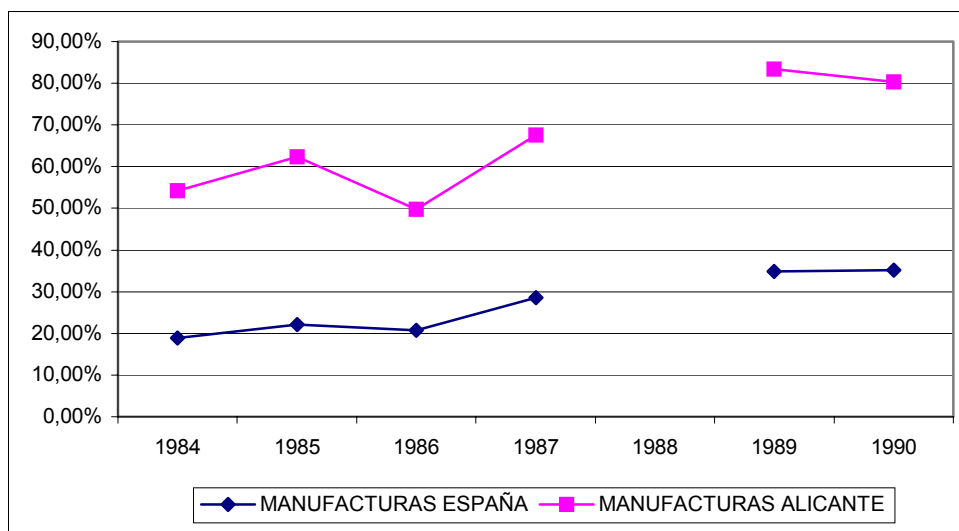
Con las aportaciones económicas del Fondo, los empresarios podían eliminar a las plantillas sin incurrir en costes de despidos, que podían ser elevados dependiendo de la antigüedad y salario del trabajador y sin que, por otra parte, los trabajadores

reaccionaran de forma convulsiva trastornando la normalidad de las relaciones colectivas. La existencia del Fogasa dotó al sistema de relaciones laborales provincial de un grado artificial de flexibilidad e incentivó la movilidad empresarial: piedra angular en la reconversión de las manufacturas zapateras.

El sector industrial alicantino, encabezado por el calzado, absorbía la mayor parte de recursos que la Institución destina en Alicante (Gráfico 3), incrementando su peso a partir de 1987. La única posibilidad de subsistir en unos mercados cada vez más competitivos sin haber modernizado, suficientemente, las estructuras productivas era cargando los costes sobre el factor trabajo e insistiendo en la estrategia de cerrar las explotaciones y que otros pagaran los créditos laborales.

las manufacturas españolas recurrían al Fondo en una proporción muy reducida al compararlas con las alicantinas, existía, por tanto, una particularidad en el comportamiento de nuestro tejido industrial. La sobreutilización del recurso al Fondo en el sector manufacturero, sobre todo a partir de 1986 indica que, ante la mayor competencia internacional y la liberalización de los mercados que imponía la entrada en la Comunidad Europea, el calzado alicantino había descubierto la estrategia que le permitiría sobrevivir. El Fogasa pagaría los costes de despido de los trabajadores y los empresarios cerraban unas mercantiles y abrían otras sin cargas ni costes laborales por antigüedad.

Gráfico 3: PRESTACIONES EN LAS MANUFACTURAS SOBRE EL TOTAL (ESPAÑA Y ALICANTE)



Fuente: Memorias del Fondo de Garantía Salarial. Elaboración propia

Por otra parte, el Fogasa puede recuperar las cantidades satisfechas en el desarrollo de su función (Art. 33.5 del ET). Para ello, el Fondo está obligado a subrogarse en los “derechos y acciones de los trabajadores, manteniendo el carácter de crédito privilegiado que les confiere el artículo 32 de la Ley”. A pesar de que las prestaciones del Fondo siguen manteniendo la prioridad, como los créditos de los trabajadores, ante la posibilidad de cobro, lo cierto es que el ejercicio de estas acciones está condicionado a los activos de las empresas.

La posibilidad de que las empresas que recurren al Fondo lleguen a mejor fortuna es casi imposible, el cierre súbito y la desaparición del empleador provocan que la mayor parte de insolvencias se declaren definitivas y sin activos que ejecutar, ya que la descapitalización de la empresa, antes del cierre, está dentro de la estrategia del empresariado alicantino para reestructurarse. Por tanto, el Fondo se verá obligado a archivar el expediente tras un plazo de confirmación de la inexistencia de patrimonio del deudor, lo que dará lugar a un nulo reembolso de las cantidades abonadas. Lo que se traduce en una ratio de recuperación provincial mucho menor a la media española.

Cuadro 7: EVOLUCION DE LAS PRESTACIONES Y RECUPERACIONES DEL FOGASA. España-Alicante. (Millones de pesetas corrientes)

	<b>PRESTACIONES INSOLVENCIA</b>		<b>RECUPERACIONES EN EFECTIVO</b>		<b>RATIO DE RECUPERACION*</b>		<b>% ALICANTE SOBRE ESPAÑA</b>	
	España	Alicante	España	Alicante	España	Alicante	presta- ciones	recupe- ración
<b>1980</b>	9.110,6	525,5	124,6	0,1	1,37	0,01	5,7	0,0
<b>1981</b>	24.084,4	2.126,9	119,4	0,9	0,50	0,04	8,8	0,7
<b>1982</b>	36.186,6	2.982,8	209,7	6,1	0,58	0,21	8,2	2,9
<b>1983</b>	46.322,8	3.616,7	458,4	25,9	0,99	0,72	7,8	5,6
<b>1984</b>	59.204,0	4.716,2	599,9	13,7	1,01	0,29	7,9	2,3
<b>1985</b>	43.936,3	3.388,2	852,5	93,8	1,94	2,77	7,7	11,0
<b>1986</b>	48.386,8	4.090,0	2.837,0	76,4	5,86	1,87	8,4	2,6
<b>1987</b>	68.218,1	7.328,9	3.036,4	165,9	4,45	2,26	10,7	5,4
<b>1988</b>	50.044,2							
<b>1989</b>	41.008,7	5.104,1	2.295,9	184,6	5,60	3,62	12,4	8,0
<b>1990</b>	36.796,8	4.998,6	2.023,2	76,4	5,50	1,53	13,5	3,7

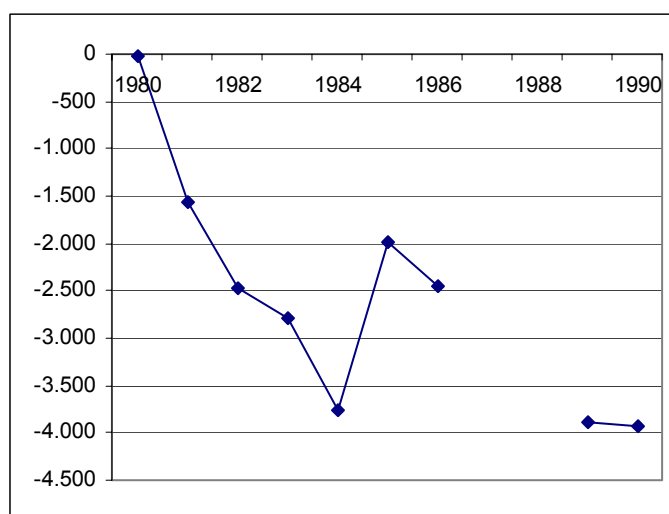
Fuente: Memorias del Fondo de Garantía Salarial. Elaboración propia

\*Cociente (prestaciones año t/recuperaciones en efectivo año t)x100

El Ente Público abona los créditos laborales a trabajadores alicantinos que, en la mayor parte de ocasiones, proceden de empresas que se encuentran en una insolvencia irreversible. Es más, son empresas que han procedido al cierre y el Fogasa, al convertirse en acreedor de la sociedad por los créditos abonados a los trabajadores no podrá recuperar parte de los mismos ya que, en ningún caso, la empresa desaparecida llegará a mejor fortuna.

El fuerte recurso provincial al Fondo por insolvencia y la imposibilidad de cobrar las deudas de los empresarios por haber desaparecido da unos saldo negativos en la unidad provincial de la Institución, que tampoco son compensados con los ingresos por cuotas. El principio de solidaridad interterritorial, que mantiene la Institución, permite que con el superávit de unas provincias que recurren poco al Organismo se salden los déficit de otras, que lo han utilizado, cómo única ayuda, para sufragar parte de los costes de su reconversión.

Gráfico 4: SALDO DE LA UNIDAD PROVINCIAL ALICANTINA DEL FOGASA. (Millones de pesetas corrientes)



Fuente: Memorias del Fondo de Garantía Salarial. Elaboración Propia

La reestructuración industrial sin planificación ni coordinación pública repercutió en los saldos provinciales del Fogasa. El creciente déficit era la consecuencia económica de una estrategia desarrollada, básicamente, por las manufacturas zapateras y que relacionaba íntimamente la evolución del sector exterior con los saldos de la Institución en Alicante. Así, entre 1984 y 1985, la fuerte apreciación del dólar tiró de las exportaciones de zapatos a Estados Unidos y el déficit del Fondo tendió a reducirse, sin embargo, a partir de 1986, la sobrevaloración de nuestra moneda con respecto a la mayor parte de los países donde se orientaban nuestras exportaciones, limitaba las ventas exteriores (cuadro 2) y el sector, para mantener la competitividad, intensificaba la estrategia para redimensionarse y reducir costes, lo que daba como resultado un mayor déficit de la Institución en Alicante.

El Fogasa fue el único apoyo público para la supervivencia del calzado alicantino. Una Institución que hacía más barato, aunque no fuera su pretensión, el coste del despido y permitía liberarse del pago de una deuda que, de otro modo, no hubieran podido afrontar si se quería mantener la competitividad exterior. Pero la práctica se convirtió en un vicio aceptado socialmente, que si por un lado, permitió una reorganización empresarial

sin conflictos sociales, por otra parte, mantuvo a unos sectores menos dinámicos y contribuyó al empeoramiento de las condiciones laborales de las zonas afectadas.

## **5. LOS RESULTADOS SOBRE LA ECONOMIA ALICANTINA DE LA ESTRATEGIA DE REESTRUCTURACION INDUSTRIAL. (1980-1990)**

### **5.1. La evolución del mercado laboral**

La evolución de la actividad económica y, por consiguiente, del mercado laboral es más estable en la Comunidad Valenciana que en el resto de España. El turismo y la exportación juegan un papel anticíclico ante recesiones de la demanda interna. Además, el predominio de pequeñas empresas, de carácter familiar, en el tejido económico de la Comunidad, permite una mejor adaptación a los cambios de coyuntura económica, dada la mayor posibilidad de acomodar su capacidad productiva. (Hernández, C. 1995).

Durante el segundo quinquenio de la década el empleo de la Comunidad Valenciana muestra una evolución mejor que la del resto del país, pese a que su población activa había crecido más que la española por la inmigración de mano de obra de otras zonas españolas. El volumen de activos y ocupados valencianos es superior a la media nacional y el de parados es inferior, lo que se debe a una estructura económica dinámica y capaz de adaptarse a las evoluciones del ciclo económico generando empleo. Sin embargo, la distribución provincial de los parados, en la Comunidad Valenciana, muestra evoluciones que reflejan realidades laborales y económicas distintas.

**Cuadro 8: TASAS DE PARO**

	<b>1980</b>	<b>1985</b>	<b>1990</b>
<b>ESPAÑA</b>	13.1	20.3	16.2
<b>C. VALENCIANA</b>	13.6	21.3	14.3
<b>ALICANTE</b>	12.6	21.6	17.5
<b>CASTELLON</b>	5.1	14.0	9.7
<b>VALENCIA</b>	11.0	21.0	12.9

Fuente: EPA. 4º trimestre. Boletín de Estadísticas laborales, 1991. Elaboración propia

Durante los primeros ochenta tasas de paro provinciales evolucionaron como el conjunto español pero, en el periodo de expansión económica, la evolución fue dispar.

Mientras que en Castellón y Valencia se generaba empleo lo que reducía la tasa de desempleo en más de un treinta por cien, en la provincia alicantina la reducción no llega al veinte por cien. La resistencia a la baja se debió principalmente a la debilidad de la estructura productiva que fue incapaz de crecer y crear puestos de trabajo activamente.

## 5.2. El estancamiento de las manufacturas

La producción industrial alicantina estuvo creciendo por encima de la media nacional hasta 1983. La estructura empresarial basada en pequeñas empresas permitió, en un principio, realizar ajustes suaves a los cambios de la coyuntura económica y por tanto, demorar en el tiempo los efectos de las crisis. Sin embargo, a partir de 1983, la crisis alcanzó a los sectores tradicionales alicantinos y su estancamiento perduró el resto de la década.

Cuadro 9: TASAS DE CRECIMIENTO DE LA PRODUCCION (PIB).

	1979-81		1981-83		1983-85		1985-87		1987-89	
	(A)	(E)	(A)	(E)	(A)	(E)	(A)	(E)	(A)	(E)
<i>Agr.</i>	9,1	8,5	32,0	26,8	22,6	19,2	12,9	11,5	10,9	17,6
<i>Ind.</i>	30,2	24,6	22,6	21,8	16,4	18,1	17,1	20,7	15,4	16,7
<i>Con.</i>	8,4	-7,7	18,4	19,8	10,4	15,8	11,6	18,3	35,1	33,1
<i>Ser.</i>	30,3	27,3	28,4	25,0	23,3	22,1	25,4	24,4	21,8	21,4
<i>Tot</i>	27,4	22,3	25,0	23,3	19,1	19,8	20,3	21,8	19,9	20,3

Fuente: BBV: La Renta Nacional y su distribución por provincias. Elaboración propia.

(A): Alicante

Agr.: Agricultura

(E): España

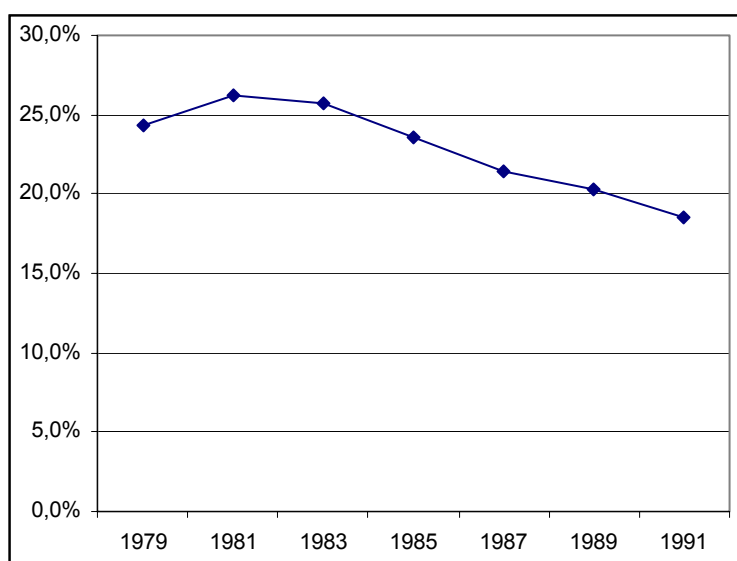
Ind.: Industria

Con.: Construcción

Ser.: Servicios

La obligatoriedad de liberalizar los mercados interiores y la existencia de unos tipos de interés y de cambio elevados para controlar la inflación son, por sí solas, condiciones suficientes para perder competitividad, pero si le unimos la insistencia de mantener un sistema productivo basado en bajos salarios, cuando habían dejado de serlo, y la falta de innovación técnica y organizativa, la pérdida de competitividad se traduce en un estancamiento de los sectores expuestos a la competencia internacional.

Gráfico 5: PIB MANUFACTURERO SOBRE EL PIB TOTAL PROVINCIAL



Fuente: BBV: La renta nacional y su distribución provincial. Elaboración propia.

Las manufacturas alicantinas perdían peso en la economía provincial. Las expectativas de los empleadores de que los costes laborales y fiscales seguirían aumentando y la reducción de las ventas obligaba a cambiar los métodos de producción y a desarrollar actividades más especializadas y de mayor calidad. El diseño y la fabricación de maquinaria, la diferenciación de producto, las mejoras en las redes de distribución hubieran sido actividades generadoras de más riqueza y demandantes de una mano de obra más cualificada, capaces de producir unas sinergias en la economía provincial que hubieran permitido un mayor crecimiento y desarrollo económico. Sin embargo, el hecho de que el dinero no fuera atractivo para la inversión, la inexistencia de políticas gubernamentales horizontales de apoyo a la pequeña y mediana empresa y la tradición de los subsectores manufactureros de recurrir a la ocultación de la producción para superar las crisis<sup>40</sup> impidieron que los sectores se modernizaran y las

<sup>40</sup> La existencia de un tejido empresarial configurado por pequeñas empresas con tradición industrial, con vocación exportadora e intensivas en la utilización del factor trabajo, permite una desconcentración empresarial dadas las posibilidades de fraccionar y diseminar geográficamente las distintas fases del proceso productivo, proliferando las pequeñas unidades que aparecen o se sumergen según las posibilidades que le ofrezca el mercado. RUESGA BENITO, S.M. (1988).

únicas ganancias de la productividad se debieron, casi exclusivamente, a las reducciones de las plantillas de las empresas.

Cuadro 10: CRECIMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD POR GRANDES SECTORES

	<i>Agricultura</i>		<i>Industria</i>		<i>Construcción</i>		<i>Servicios</i>	
	(E)	(A)	(E)	(A)	(E)	(A)	(E)	(A)
<b>1979</b>	0,5	0,6	3,4	2,7	2,4	2,5	1,6	1,7
<b>1981</b>	0,7	0,6	4,6	3,9	2,6	2,8	2,2	2,3
<b>1983</b>	1,0	1,0	6,1	5,1	3,3	3,5	2,8	3,0
<b>1985</b>	1,4	1,4	7,6	6,2	4,1	4,3	3,4	3,8
<b>1987</b>	1,7	1,8	9,6	7,5	4,8	5,0	4,3	4,7
<b>1989</b>	2,3	2,4	11,4	9,1	6,0	6,4	5,2	5,6

Fuente: BBV: La Renta Nacional y su distribución provincial. Elaboración propia.

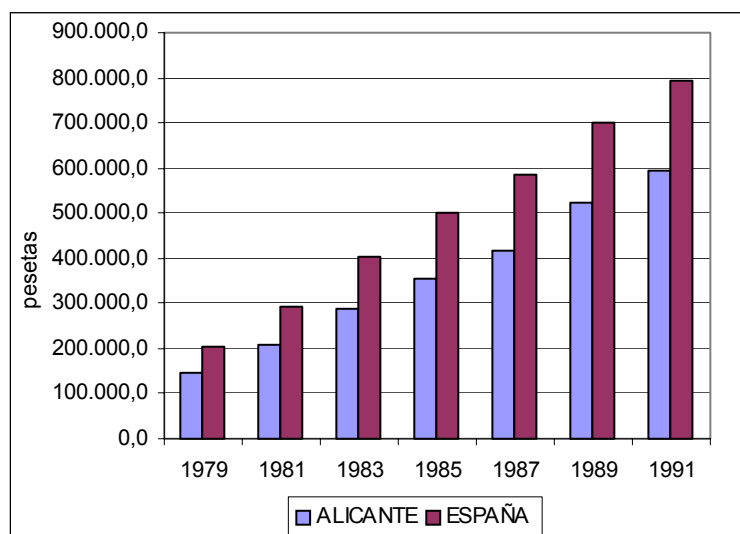
(E): España

(A): Alicante

El menor incremento de la productividad industrial alicantina (Cuadro 10) es imputable, en primer lugar, a la especialización e insistencia de mantener las actividades manufactureras donde la relación entre el valor de la producción y el número de empleados es menor que en las industrias de bienes de mayor valor añadido. En segundo lugar, a la estrategia seguida para la reorganización industrial que primó la reducción de costes en vez de la inversión en capital.

Las manufacturas alicantinas, encabezadas por el calzado por su importancia exportadora, necesitaban adaptarse a las nuevas condiciones de la demanda internacional y, aunque las variaciones en el tipo de cambio podían conseguir unas mejoras pasajeras de la competitividad, era fundamental adoptar medidas profundas de reforma y mejora de los procesos de producción y distribución. Sin embargo, en este periodo, la falta de apoyo estatal llevó al sector a desarrollar un modelo de reconversión que acentuaba el grado de atomización empresarial, empeoraba las condiciones laborales y limitaba, aun más, el acceso a la inversión en capital, lo que, a su vez y con el transcurrir del tiempo, abundaría en la pérdida de competitividad.

Gráfico 6: CONSUMO DE CAPITAL POR UNIDAD DE TRABAJO



Fuente: BBV. Renta Nacional y su distribución provincial. Elaboración propia.

La posibilidad de fraccionar el proceso productivo y trasladar de lugar los escasos bienes de equipo, junto con la abundancia de una mano de obra poco cualificada y con escaso poder sindical facilitaba el cierre empresarial al margen de los procedimientos legales. El despido de los trabajadores que cobrarían del Fogasa, el impago de las cuotas a la Seguridad Social y deudas tributarias y la aparición de una nueva unidad empresarial más pequeña era una estrategia consolidada para sobrevivir a la competencia en los mercados internacionales.

El aumento de la inversión industrial registrada en nuevas industrias era fruto de la estrategia, se creaban nuevas explotaciones pero nunca se renovaba el utillaje, lo que llevó a sustituir una estructura empresarial endeble por otra aún más flexible y pequeña capaz de aparecer y ocultarse dependiendo de las necesidades.

Cuadro 11: INVERSION INDUSTRIAL REGISTRADA NUEVA Y AMPLIACIONES. (COMUNIDAD VALENCIANA-ALICANTE)  
(Millones de pts corrientes)

	<i>C. Valenciana</i>		<i>Alicante</i>		<i>% provincial sobre la Comunidad</i>	
	Nuevas	Ampliación	Nuevas	Ampliación	Nuevas	Ampliación
1980	3.424,0	1.910,5	1.105,0	673,0	32,3%	35,2%
1981	7.550,0	9.485,0	1.799,0	2.038,0	23,8%	21,5%
1982	9.029,0	8.293,0	2.326,0	2.476,0	25,8%	29,9%
1983	7.001,0	8.592,0	1.795,0	1.688,0	25,6%	19,6%
1984	10.203,9	21.224,0	3.270,0	1.818,2	32,0%	8,6%
1985	14.027,7	10.863,6	5.811,6	2.227,5	41,4%	20,5%
1986	17.481,4	15.588,8	5.340,9	2.672,1	30,6%	17,1%
1987	23.399,4	20.896,4	6.904,8	3.998,7	29,5%	19,1%
1988	43.832,2	28.782,0	10.675,6	5.023,6	24,4%	17,5%
1989	26.333,1	27.443,5	7.632,4	5.664,1	29,0%	20,6%
1990	32.345,0	21.998,0	11.745,0	4.549,0	36,3%	20,7%

Fuente: Anuario Estadístico de la Comunidad Valenciana. Elaboración propia.

Las ayudas fiscales<sup>41</sup> y laborales<sup>42</sup> a la creación de nuevas empresas y la existencia de instituciones públicas, que permitían la reducción del coste de los ajustes de plantillas al asegurar el cobro de los créditos laborales en caso de que el obligado al pago no fuera solvente, como es el Fogasa, impulsaron el crecimiento del grado de movilidad empresarial sin una mejora técnica y organizativa sustancial. La reestructuración industrial se estaba haciendo pero no de la forma más acertada desde el punto de vista social y económico.

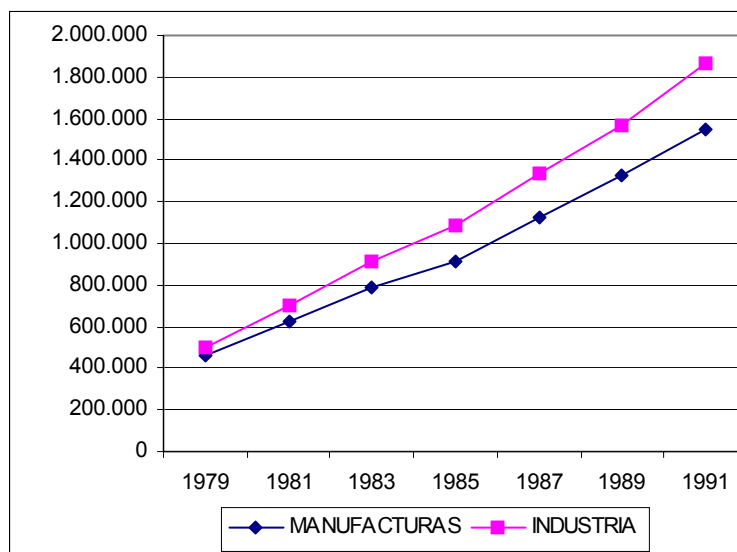
En un sistema económico cada vez más abierto, en el que se estaban desmantelando los aranceles que protegían el mercado interior y en el que la política cambiaria estaba más limitada para estimular al sistema productivo era necesario transformar las estructuras productivas para mantener la competitividad de aquellos sectores especializados en la venta exterior. Un sector, como el calzado, expuesto a la evolución de los mercados internacionales y sin el beneficio de una política de ajuste positivo desarrolló una estrategia de subsistencia que repartió los costes entre distintos

<sup>41</sup> Se dio libertad para amortizar las inversiones posteriores a 1985, de desgravar en el impuesto de Sociedades para las nuevas empresas, etc. MINISTERIO DE ECONOMIA Y HACIENDA: "Programa económico a medio plazo". BARCON, A. y otros (1989).

<sup>42</sup> El contrato de trabajo temporal fue una figura que se generalizó a partir de la reforma del Estatuto de los Trabajadores, de 1984, y potenció la sustitución de trabajadores fijos por temporales.

agentes económicos. En primer lugar, sobre los trabajadores al ver cómo se quedaban sin empleo y sin cobrar sus créditos laborales y cómo, se iban deteriorando sus condiciones de trabajo, en muchas ocasiones a causa del empleo oculto o de tener que recolocarse en una nueva explotación para desarrollar el mismo trabajo pero, en este caso, con menores sueldos por no tener antigüedad y menor estabilidad laboral.

Gráfico 7: COSTE DEL TRABAJO UNITARIO. ALICANTE.



Fuente: BBV. La renta nacional y su distribución provincial. Elaboración propia

La contención salarial de los trabajadores manufactureros y la aceptación de cobrar del Fogasa sus créditos laborales fueron las piezas claves que permitieron la subsistencia del sector.

En segundo lugar, sobre la Administración Pública al no recuperar las deudas, al dejar de recaudar impuestos por el afloramiento de la economía sumergida y al tener que abonar las indemnizaciones y salarios dejados de percibir a los trabajadores mediante el Fogasa. Por último, sobre la economía provincial ya que al mantener unos actividades que perdían competitividad no se promocionaron otras capaces de generar más riqueza para la provincia y por tanto, mayor desarrollo económico y generación de empleo de mejor calidad.

## **6. CONCLUSIONES**

El objetivo de este trabajo era describir cómo las manufacturas alicantinas y, particularmente el calzado, desarrollaron una estrategia para sobrevivir ante la mayor competencia internacional y la falta de una ayuda estatal concreta para afrontar la reconversión industrial durante la década de los ochenta.

La reestructuración del subsector calzado alicantino no se entiende sin la utilización del Fondo de Garantía Salarial, una institución pública cuya función principal es garantizar los salarios pendientes de pago e indemnizaciones por despido de los trabajadores, cuando el obligado a ello es insolvente. Sin embargo, en nuestra provincia, se ha utilizado como un instrumento que dotaba de una flexibilidad artificial al mercado de trabajo y permitía una movilidad empresarial. Dos factores imprescindibles para mantener la competitividad internacional dado que no se estaban modernizando suficientemente las estructuras productivas.

Para ello, se han analizado las prestaciones del Fogasa en nuestra provincia, los motivos que han inducido su pago y los sectores que las han recibido, al mismo tiempo que se relacionaban con la evolución de los despidos y su grado de judicialización por estar íntimamente relacionada la intervención del Fondo y los despidos individuales. Todo ello, en un contexto económico de apertura de mercados, desarmes arancelarios para integrarnos en la Comunidad Europea e imposibilidad de realizar devaluaciones competitivas que incentivaran la exportación.

La década de los ochenta, en nuestro país, es el periodo de las políticas industriales. Desde el Gobierno se actuaba para ayudar financieramente a modernizar y ajustar las capacidades productivas de los sectores que más sufrían la crisis: la industria. Las reconversiones industriales suponen drásticos recortes en las plantillas que, con la intervención estatal mediante la sobreprotección de los trabajadores afectados y el

incentivo al desarrollo de otras actividades, se evita que sean traumáticos para el colectivo que los sufre y procura el desenvolvimiento económico de la zona en reconversión.

El subsector del calzado, a pesar de haber sido considerado como un sector básico para la economía nacional por su capacidad de generar empleo y su especialización en la exportación, no pudo disfrutar de las ayudas financieras y asistenciales como otros sectores españoles también considerados en reconversión.

Su concentración espacial en la provincia de Alicante lo convierte en un sector clave para el desarrollo de la economía alicantina. La imposibilidad de acceder a los planes de reconversión industrial impidió que nuestra provincia estuviera en promoción y pudiera atraer inversiones que desarrollaran actividades económicas más dinámicas.

La falta de una política global y coordinada para la reconversión del sector y la dificultad de actuar sobre los tipos de cambio avocó a que las empresas zapateras se fueran reestructurando de forma poco ortodoxa para mantener las cuotas de mercado exteriores. Pero los costes de esta forma de reconversión, al margen de la Administración, han recaído sobre el propio sector, sobre sus trabajadores, sobre el Fogasa y sobre el conjunto de la economía alicantina que sufrió un mayor estancamiento y desempleo que las demás provincias de la Comunidad Valenciana.

La importancia de los despidos individuales y su grado de judicialización en nuestra provincia, incluso en la fase expansiva del ciclo económico, no se debe a la falta de acuerdo entre partes en los actos de conciliación sino a la desaparición del empleador, lo que obliga a poner en funcionamiento al Fogasa motivando la prestación a los trabajadores en la decisión judicial por desaparición de la persona legal obligada al pago. Es decir, más del noventa por ciento de las prestaciones que el Fondo realiza en

nuestra provincia las hace a instancias de un juez que le obliga a intervenir y garantizar los créditos de trabajadores que han sido víctimas de un cierre empresarial súbito.

La escasa relevancia de las prestaciones del Fondo por regulación y la elevada importancia de las de insolvencia a instancias de un juez indican que las empresas solían cerrar sin pagar las deudas, principalmente con sus trabajadores, los cuales cobrarían posteriormente del Fogasa, manteniendo así, la estabilidad social.

Sin embargo, esto permitía a los patronos eludir los costes del despido y otras deudas con la Administración, y volver a abrir una nueva explotación más pequeña, sin cargas históricas y empleados más baratos, ya que no se tendrían que pagar derechos por antigüedad.

Las manufacturas, encabezadas por el calzado, fueron el destino de más de un ochenta por ciento de las prestaciones del Fogasa en Alicante, una proporción mucho más importante que en el conjunto español, por lo que, fue este subsector quien consideró que el seguro de salarios era una institución que le permitía eludir los costes de despedir, como si de una subvención a fondo perdido se tratara, y así volver a crear una nueva empresa más pequeña y flexible. Por ello, el Fondo de Garantía Salarial nunca pudo recuperar las cantidades abonadas en nuestra provincia y mantuvo unos saldos deficitarios. La práctica del cierre, desaparición y endoso de las deudas al Fondo se consolidaba y la resistencia a la baja de los despidos, de forma anacrónica, indican que la reestructuración de las empresas del sector se inició a principios de los ochenta pero en la segunda mitad, la imposibilidad de utilizar la política cambiaria como apoyo al sistema productivo, la fuerte dependencia de los mercados exteriores y la inexistencia de actuaciones de ajuste positivo que modernizaran las estructuras productivas del sector intensificaron aún más la estrategia seguida por los empresarios manufactureros alicantinos, lo que se tradujo en un mayor déficit de la Unidad provincial del Fondo.

Las dificultades de venta en los mercados exteriores se reflejaban en un mayor recurso de la Institución. La evolución de los tipos de cambio y de las exportaciones zapateras condicionaba el déficit de un organismo nacional que, en principio, poco tenía que ver con el sector exterior pero que, sin embargo, ante los escasos cambios en las estructuras productivas del sector que mejoraran su competitividad, ésta se ganaba a través de la reducción en los gastos laborales y por tanto, utilizado el Fogasa como institución que subvencionaba el despido.

La elevada importancia de la inversión industrial en nuevas industrias a partir de 1983 y la reducción en ampliaciones corrobora que los industriales alicantinos preferían abrir nuevos centros a modernizar el utillaje de los ya existentes. Se insistía en mantener unas actividades en las que se había dejado de ser competitivo, la reducción en los costes de producción se primaba sobre la inversión y modernización, lo que supuso un estancamiento del sector y un obstáculo para reasignar los recursos de manera más eficiente.

En definitiva, el sector del calzado, durante la década de los ochenta, pudo sobrevivir y hacer frente a la competencia exterior gracias al Fondo de Garantía Salarial que asumía de forma subsidiaria los costes de reorganización empresarial.

## BIBLIOGRAFIA

ALONSO BARCON, A. y otros: (1989): “Mercado de trabajo y políticas de empleo en la Comunidad Valenciana”. Generalitat Valenciana. Valencia.

ALONSO, J.A. (1988): El sector exterior. En “España-Economía”. García Delgado, J.L. (Dir.). Espasa-Calpe. Madrid.

ANUARIOS ESTADÍSTICOS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA. Generalitat Valenciana.

ARGANDOÑA, A. (1983): ¿Cuál es la política industrial aceptable?. En “Papeles de Economía Española”. Núm. 15

BANCO URQUIJO (1982): “La economía española en la década de los 80”. Alianza Universidad. Madrid.

BARCIELA, C. LOPEZ, M.I. MELGAREJO, J. MIRANDA, J.A. (2001): “La España de Franco (1939-1975)”. Síntesis. Madrid

BBV: “La renta nacional y su distribución provincial. Series Homogéneas”. 1998

BOLETÍN DE ESTADÍSTICAS LABORALES. Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

BRU PARRA, S. y PASTOR, V.J. (1989): La industria Valenciana: Balance de una década. En “Revista de Treball”. Núm. 10. Generalitat Valenciana. Conselleria de Treball y Seguretat Social. Valencia.

CERDA ALBERO, F. y SANCHO GALLARDO, I. (2001): Quiebras y suspensiones de pagos: claves para la reforma concursal. “Colección de estudios económicos de la CAIXA”. Núm. 25

CIRCULO DE EMPRESARIOS(1984): La reconversión industrial: Un posible análisis. En “Papeles de Economía Española”. Núm. 21

CONSEJO DE CAMARAS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA. “Informe económico regional”. Varios años.

COSTAS COMESAÑA, A. y SERRANO SANZ, J.M. (1996): “Problemas escogidos y olvidados de la política económica. En “Diez ensayos sobre economía española”. Serrano, J.M. y Costas, A. (Comp). Pirámide. Madrid.

DEL PESO Y CALVO, C. (1970): La fuerza mayor propia. En “Diecisiete lecciones sobre fuerza mayor, crisis de trabajo, reconversión y desempleo”. AA.VV. Universidad de Madrid. Madrid.

Diario “INFORMACION DE ALICANTE”

ESPINA MONTERO, A. (1999): “Crisis de empresas y Sistema Concursal”. Consejo Económico y Social. Madrid.

ESTATUTO DE LOS TRABAJADORES. Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

FINA, L. y TOHARIA, L. (1987): “Las causas del paro en España. Un punto de vista estructural”. Fundación IESA. Madrid.

FERNANDEZ CASTRO, J. (1985): Una aproximación sociológica a la reconversión industrial. En “Papeles de Economía Española”. Núm 22.

FUENTES QUINTANA, E. (1989): Tres decenios de la Economía Española. En “España-Economía”. García Delgado, J.L. (Dir.). Espasa-Calpe. Madrid.

GALBRAITH, J.K. (1993): “Historia de la economía”. Ariel. Barcelona

GAMIR, L. (1985): “Contra el paro y la crisis”. Planeta. Barcelona.

GARCIA MURCIA, J. (1983): “El Fondo de Garantía Salarial”. Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Madrid.

HERNANDEZ PASCUAL, C. y ALCARAZ GARCIA, E. (1989): “Cambios en el tejido empresarial de la provincia de Alicante”. FUNDESEM. Alicante.

HERNANDEZ PASCUAL, C. (1995): “Regulación, Flexibilidad y Segmentación del Mercado de Trabajo”. Instituto de Cultura Juan Gil-Albert. Alicante.

KEYNES, J.M. (1997): “Teoría general de la ocupación, el interés y el dinero”. Fondo de Cultura Económica, Serie Economía. Mexico. D.F.

LLUCH, E. (1995): La limitación exterior de la economía española. En “Diez ensayos sobre economía española”. Serrano, J.A. y Costas, A. (Comp). Piramide. Madrid.

LUJAN ALCARAZ, J. (1996): Despido y Fondo de Garantía Salarial. en “Revista de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense”. Núm. 19. Madrid.

MALO OCAÑA, M.A. (1998): “Las indemnizaciones por despido. Un problema de negociación”. ARCAL. Madrid.

MARIN ARCE, J.M. (1996): Crisis industrial y reconversión (1976-1982). En “Historia de la Transición (1975-1976)”. Tusell y Soto (Eds.). Alianza Universidad. Textos. Madrid.

MARINEZ ESTEVEZ, A. MARTINEZ SERRANO, J.A. y REIG, E. (1988): La economía valenciana ante la recuperación económica. En "Papeles de Economía Española". Núm. 34.

MARTINEZ ESTEVEZ, A. y PEDREÑO MUÑOZ, A. (1990): Comunidad Valenciana. En "Papeles de Economía Española". Núm 45. Monográfico sobre la economía de las Comunidades Autónomas Españolas.

MEMORIAS DEL FONDO DE GARANTIA SALARIAL.

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA (1983): "Libro Blanco de la Reindustrialización". Madrid.

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA: "Programas económicos a medio plazo". Varios años.

MONEREO PEREZ, J.L. (1988): "Las reconversiones industriales en el derecho del trabajo". Universidad de Granada. Granada.

MYRO, R. (1989): La industria: Expansión, crisis y reconversión. En "España-Economía". García Delgado, J.L. (Dir.). Espasa-Calpe. Madrid.

NAVARRO, M. (1989): "Política de reconversión: Balance crítico". EUDEMA. Madrid.

RAMON DANGLA, R. (2001): Las relaciones laborales durante la transición democrática: el papel del Fondo de Garantía Salarial. En "Trabajo y relaciones laborales en la España contemporánea" Arenas, Puntas y Pons (Eds.). Mergablum. Sevilla.

RAMOS HIDALGO, A. y otros. (1996): "Ordenación del territorio y planificación estratégica en el eje de desarrollo económico del Vinalopó. Alicante.". Universidad de Alicante. Alicante.

ROJO, L.A. (1988): La crisis de la economía española, 1973-1984. En "La Economía Española en el siglo XX. Una perspectiva histórica". Nadal, Carreras, Sudriá (Comp). Ariel. Barcelona.

RUESGA BENITO, S.M. (1988): "Al otro lado de la economía". Piramide. Madrid.

SAGARDOY BENGOCHEA, J.A. (1984): Medidas laborales y de seguridad social en la reconversión industrial. En "Documentación Laboral". Núm. 12

SEBASTIA ALCARAZ, R. (1999): "La inversión industrial en la provincia de Alicante (1970-1991). Publicaciones de la Universidad de Alicante. Alicante.

SEGURA, J. (1983): La crisis económica como crisis industrial: la necesidad de una estrategia activa. En "Papeles de Economía Española". Núm. 15

SEGURA, J. (1989): Intervención pública y política del bienestar: El papel del Estado. En "España-Economía". García Delgado, J.L. (Dir.). Espasa-Calpe. Madrid.

SEGURA, J. (1992): “La industria española y la competitividad”. Real Academia de las Ciencias Morales y Políticas. Espasa-Calpe. Madrid.

TOHARIA CORTES, L. (1998): “El Mercado de Trabajo en España”. McGRAW-HILL. Madrid.

YBARRA PEREZ, J.A. (1982): La reestructuración espontánea de la industria del calzado español: aspectos laborales y territoriales. En “Boletín de Estudios Económicos”. Núm. 17.